

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, siete (07) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	RECURSO DE INSISTENCIA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-01421-00
DEMANDANTE:	HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO
DEMANDADO:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
ASUNTO	DECLARA MAL DENEGADO EL DERECHO DE PETICIÓN

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a resolver en única instancia el recurso de insistencia presentado por el señor Hernán Ramírez Barreiro, remitido a esta Corporación por el Departamento del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES

2.1. La Petición

El señor Hernán Ramírez Barreiro, equipajero de la Asociación de Equipajeros del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón - Asoequitur, en ejercicio del derecho de petición, el 31 de enero de 2020, solicitó al Departamento del Valle del Cauca *“copia de los documentos que anexaron la junta directiva de Asoequitur, en especial el Acta 55”*, los cuales hacen parte del proceso de inspección vigilancia y control 01-305 adelantado frente a mencionada entidad. La solicitud fue reiterada el 17 de marzo de 2020.

2.2. Decisión del Departamento del Valle del Cauca

La petición presentada por el señor Hernán Ramírez Barreiro fue resuelta desfavorablemente. Como sustento de dicha decisión, el Departamento del Valle del Cauca sostuvo que si bien el quejoso es quien pone en conocimiento las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido la entidad sin ánimo de lucro, no es considerado sujeto procesal en el procedimiento administrativo sancionatorio. Que, dentro del proceso de supervisión de las entidades sin ánimo de lucro, se requiere información jurídica, financiera, administrativa y contable, que goza de reserva documental, en los términos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 410 de 1971, por el cual se expidió el Código de Comercio.

Explicó que, conforme a lo anterior, la información que reposa en la entidad no pierde la naturaleza de reservada y no puede ser divulgada a los particulares sin la autorización de los implicados, salvo que se requiera por autoridad competente.

2.3. El Recurso de Insistencia

El 28 de octubre de 2020, el señor Hernán Ramírez Barreiro, ante la respuesta negativa emitida por el Departamento del Valle del Cauca frente a su petición interpuso acción de tutela, con el propósito de obtener la información requerida. Mediante sentencia de segunda instancia del 28 de octubre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira resolvió tutelar el derecho fundamental de petición del accionante y ordenó *“a la doctora LIA PATRICIA PEREZ CARMONA en su calidad de directora del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, que dentro del término de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, se sirva dar trámite al recurso de insistencia del señor HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO, conforme lo expuesto en la parte motiva”*.

Lo anterior por cuanto, a su juicio, al presentar la acción de tutela, el señor Hernán Ramírez Barreiro está recurriendo la negativa emitida por la entidad frente su solicitud y, por ende, se le debe dar el trámite establecido en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Procedencia del Recurso de Insistencia y Competencia de esta Corporación

El artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, establece que toda decisión que rechace peticiones de información por motivo de reserva legal debe ser sustentada, indicando con precisión las disposiciones que impiden la entrega de la información o los documentos, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE RESERVA. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.”

Aunque la norma es precisa en señalar que no procede recurso contra la decisión que rechaza la petición de información por motivos de reserva legal, la persona interesada de conformidad con el artículo 26 del CPACA, podrá insistir en la petición ante la autoridad que invoca la reserva, para lo cual deberá surtirse el siguiente trámite:

“ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades

distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada”.

A su vez, el numeral 7 del artículo 151 del CPACA, le atribuye competencia a los Tribunales Administrativos en única instancia, para conocer de los “*recursos de insistencia*” cuando la autoridad que profiera o deba emitir la decisión sea del orden nacional o departamental, así:

“ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(...)

7. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este Código, cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá.

(...)”

De conformidad con las anteriores disposiciones, esta Corporación es competente para conocer en única instancia del presente “*recurso de insistencia*”, teniendo en cuenta que el Departamento del Valle del Cauca es una entidad del orden departamental y la decisión que rechazó la petición de información invocó un motivo de reserva legal.

3.2. Problema Jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si la información solicitada por el peticionario y que fuera negada por el Departamento del Valle del Cauca está sujeta a reserva de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

- **Derecho al Acceso a Documentos Públicos**

Respecto del derecho al acceso a documentos públicos, la Constitución Nacional lo consigna de la siguiente manera:

“ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.”

Este derecho se encuentra acorde con lo señalado en el artículo 20 de la Carta Política, el cual consagra el derecho de las personas de informar y recibir información veraz e imparcial. Por tanto, los derechos a la información y de petición, tienen una estrecha relación, pues el segundo es la garantía de cumplimiento del primero.

Ahora bien, la Ley 57 de 1985 reglamentó el derecho a la consulta de documentos oficiales, así:

“Artículo 12.- Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a

la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.”

Entiéndase pues por regla general, que los documentos de las entidades públicas pueden ser consultados por cualquier persona, salvo que frente a ellos la Constitución o la Ley haya impuesto el carácter de reservado, o que tengan relación con la defensa o la seguridad nacional. Sin embargo, como bien lo expone la misma normativa, el carácter reservado no puede ser caprichoso, sino estar sustentado debidamente, así lo dice la norma:

“Artículo 21º.- La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes.

Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente.

Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente.” (Subraya fuera de texto)

Las anteriores determinaciones, fueron recogidas por la Ley 1712 de 2014 “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”, normativa que ilustra con claridad lo atinente al acceso a los documentos.

Es clara la norma, en precisar como principio fundamental y como regla general, que la información se presume pública, exponiendo los artículos 2 y 3 lo siguiente:

“Artículo 2º. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

Artículo 3º. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios:

Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. (Subraya fuera de texto)

La norma mencionada, conceptualiza el derecho fundamental al acceso a la información de la siguiente manera:

“Artículo 4°. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática.

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.

Parágrafo. Cuando el usuario considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada.”

Así mismo, define que existen diversas clases de información pública, clasificándola en el artículo 6, de la siguiente manera:

Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal;

Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley;

Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19.

Como bien se dijo anteriormente, es posible que alguna información pese a ser pública puede tener reserva para su divulgación o ser clasificada, y por tanto está exenta del principio general de máxima divulgación. Al respecto la norma citada previó:

“Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiese causar un daño a los siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado;

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable.”

“Artículo 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

- a) La defensa y seguridad nacional;*
- b) La seguridad pública;*
- c) Las relaciones internacionales;*
- d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;*
- e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;*
- f) La administración efectiva de la justicia;*
- g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;*
- h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;*
- i) La salud pública.*

Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.”

Finalmente, el artículo 28 de la misma disposición establece que le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente.

De igual forma, la Ley 1755 de 2015 “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*” previó lo siguiente:

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:

- 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.*
- 2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.*
- 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.*
- 4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones*

estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos.

Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.”
(Negritas fuera del texto).

Sobre la reserva de la información, la Corte Constitucional ha establecido, entre otras, las siguientes subreglas:

“a. Deben estar contenidas de forma clara, expresa, taxativa, previa y precisa en una ley de la república o en una norma con fuerza de ley (Sentencias T– 391 de 2007, T 473 de 1992, T– 511 de 2010).

b. Debe perseguir un fin que sea imperativo, definido concreta y específicamente por la autoridad pública, como por ejemplo el orden público, el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica y la defensa nacional.

c. Estas finalidades deben ser interpretadas de manera restringida y no se aplican a casos similares por analogía. Así mismo no es suficiente alegar una de estas finalidades imperiosas de forma abstracta, sino que es necesario manifestar la realización de un interés público concreto, específico e imperioso. (Sentencias T – 391 de 2007, T 251 de 2002, C – 872 de 2003).

d. Deben ser proporcionales al fin que persiguen. Esto quiere decir que las restricciones deben ser necesarias útiles y proporcionales, en estricto sentido. (Sentencias T– 391 de 2007, T 251 de 2002, C – 872 de 2003, C – 010 de 2010).

e. Las respuestas que nieguen el acceso a la información deben ser motivadas y el funcionario público que se ampare en alguna reserva para negar la información debe mencionar de forma explícita la norma constitucional o legal que lo autoriza a hacerlo. (Sentencias C – 491 de 2007, T- 074 de 1997).

3.3. El Caso Concreto

El señor Hernán Ramírez Barreiro, equipajero de la Asociación de Equipajeros del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Asoequitur, dirigió al Departamento del Valle del Cauca los siguientes mensajes:

- Correo del 23 de enero de 2020:

“Buen día Sr. Carlos Andrés Guapacha Correa, por medio de la presente le solicito muy respetuosamente, la respuesta escrita proferida por el Sr. Jhon Byron Noguera Fiallos, Representante Legal de “Asoequitur”, en cuanto a

los documentos que la Gobernación del Valle le solicitó en el ACTA DE VISITA 05122019”

- Correo del 31 de enero de 2020:

“Buen día Carlos Andrés Guapacha, comedidamente le solicito por favor copia de los documentos que anexaron la junta directiva de Asoequitur, en especial el Acta 55, si usted me puede colaborar, le agradezco”.

- Correo del 17 de marzo de 2020:

“Buenas tardes Carlos Andrés Guapacha, en días pasados muy respetuosamente le solicité unos documentos que les remitió la Asociación de equipajeros de turismo del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a la fecha NO he recibido nada.

Espero pronta respuesta a mi solicitud”

Se precisa que los documentos que solicita el señor Hernán Ramírez Barreiro son los que fueron aportados por Asoequitur en el proceso de inspección vigilancia y control 01-305 adelantado frente a ésta por parte del Departamento del Valle del Cauca, a raíz de una queja que presentó el prenombrado, los cuales contienen una reforma estatutaria, estados financieros y actas de reunión de la junta directiva de la entidad. No obstante, el Departamento del Valle del Cauca negó el acceso a la información solicitada, por considerar que está sujeta a reserva legal.

El 28 de octubre de 2020, el señor Hernán Ramírez Barreiro, ante la respuesta negativa emitida por el Departamento del Valle del Cauca frente a su petición interpuso acción de tutela, con el propósito de obtener la información requerida. Mediante sentencia de segunda instancia del 28 de octubre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira resolvió tutelar el derecho fundamental de petición del accionante y ordenó *“a la doctora LIA PATRICIA PEREZ CARMONA en su calidad de directora del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, que dentro del término de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes a la notificación de este decisión, se sirva dar trámite al recurso de insistencia del señor HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO, conforme lo expuesto en la parte motiva”.*

Lo anterior por cuanto, a su juicio, al presentar la acción de tutela, el señor Hernán Ramírez Barreiro está recurriendo la negativa emitida por la entidad frente su solicitud y, por ende, se le debe dar el trámite establecido en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Precisa la Sala que, aunque el señor Hernán Ramírez Barreiro no presentó recurso de insistencia ante el Departamento del Valle del Cauca, se resolverá como tal, en virtud de lo resuelto en la sentencia de tutela anteriormente mencionada.

También, es importante mencionar que el trámite de inspección vigilancia y control dentro del cual fueron presentadas las peticiones que dieron lugar a la insistencia objeto de estudio, es adelantado por los Gobernadores de los Departamentos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1318 de 1988,



Radicación : 76001-23-33-000-2020-01421-00
Medio de control : RECURSO DE INSISTENCIA
Demandante : HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO
Demandado : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

9

artículos 1 y 2¹; Decreto 1093 de 1989, artículos 1 y 2²; Decreto 427 de 1996, artículo 12³, y Decreto 1524 de 1990, artículo 24⁴, 1529 de 1990, Igualmente, la Ley 1437 de 2011 regula de forma general el procedimiento administrativo sancionatorio del art 47 a 52 normas en las cuales no se observa que establezcan reserva alguna.

Bajo ese entendido, se tiene que el señor Hernán Ramírez Barreiro solicita el suministro de información pública clasificada, en la medida que pide la entrega de documentos privados que se encuentran en custodia del Departamento del Valle del Cauca, con ocasión del proceso de inspección vigilancia y control adelantado contra Asoequitur. Dichos documentos contienen una reforma estatutaria, actas de junta directiva y estados financieros. Por tal motivo, se hace necesario analizar la normatividad del código de comercio que regula lo atinente al derecho de reserva de los libros y papeles del comerciante.

El artículo 61 del Código de Comercio preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 61. <EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.

Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia o auditoría en las mismas”. (Negrita y subrayas fuera del texto).

Adicionalmente, el artículo 369 ibídem, dispone que “... Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía”.

¹ **Artículo 1°** Delégase en los Gobernadores de los Departamentos y en el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, la función de ejercer Inspección y Vigilancia sobre las Instituciones de Utilidad Común, domiciliadas en el respectivo Departamento y en la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, que no estén sometidas al control de otra entidad.

Artículo 2° Para efectos de la Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el representante legal de la Institución, presentará a estudio y consideración de los Gobernadores de los Departamentos y del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto, los balances de cada ejercicio, los actos y contratos de cuantía superior a cien mil pesos (\$ 100.000.00), con arreglo a las normas vigentes sobre la materia.

² **Artículo 1°** El artículo 2° del Decreto 1318 de 1988, quedará así:

“Artículo 2° Para efectos de la Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el representante legal de la Institución presentará a estudio y consideración de los gobernadores de los departamentos y del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, según el caso, los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio, con arreglo a las normas vigentes sobre la materia”.

³ **Artículo 12.** Vigilancia y control. Las personas jurídicas a que se refiere el presente Decreto continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las autoridades que venían cumpliendo tal función.

⁴**Artículo 24. Inspección y vigilancia.** Además de lo previsto en los Decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989, para ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, el Gobernador podrá ordenar visitas a las dependencias de la entidad y pedir la información y documentos que considere necesarios. Así mismo podrá asistir, directamente o a través de un delegado, a las sesiones que realicen las Asambleas de dichas entidades, con domicilio principal en el Departamento, en las cuales se elijan representantes legales o demás dignatarios.



Radicación : 76001-23-33-000-2020-01421-00
Medio de control : RECURSO DE INSISTENCIA
Demandante : HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO
Demandado : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

10

Las normas citadas permiten colegir que los libros y papeles del comerciante, tienen el carácter de reservadas, pues a estos únicamente pueden acceder sus propietarios o personas autorizadas para ello. No obstante, tal reserva no impide a los asociados ejercer su derecho de inspección sobre la aludida documentación.

En ese orden de ideas, se colige entonces que el señor Hernán Ramírez Barreiro sí puede tener acceso a los documentos aportados por Asoequitur en el proceso de inspección vigilancia y control adelantada por el Departamento del Valle del Cauca, puesto que éste los solicitó en su calidad socio de dicha entidad y, por tanto, tiene derecho a verificar la documentación de la asociación a la que pertenece.

Adicionalmente, vale la pena señalar que los estados financieros no tienen carácter reservado, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 41 de la ley 222 de 1995⁵; luego, a dicha información puede acceder cualquier persona, indistintamente de si es asociado o no de la Compañía.

Así las cosas, no encuentra la Sala impedimento legal alguno para que el Departamento del Valle del Cauca entregue al señor Hernán Ramírez Barreiro, en su calidad de asociado de Asoequitur, los documentos solicitados por este a través de correo del 31 de enero de 2020, reiterado el 17 de marzo de la misma anualidad. Por todo lo expuesto, se declarará mal denegada la mencionada petición y, en su lugar, se ordenará la entrega de la información solicitada.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR mal denegada la petición de información formulada por el señor **HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO**, mediante derecho de petición

⁵ **“ARTICULO 34. OBLIGACION DE PREPARAR Y DIFUNDIR ESTADOS FINANCIEROS. A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiera. (...)**

“ARTICULO 41. PUBLICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen los costos correspondientes.

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control podrán establecer casos en los cuales no se exija depósito o se requiera un medio de publicidad adicional. También podrán ordenar la publicidad de los estados financieros intermedios.

La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en este artículo por el término de cinco años.

Cuando los estados financieros se depositen en la Superintendencia de Sociedades, no tendrán que ser depositados en las cámaras de comercio. La Superintendencia de Sociedades asegurará los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la información que no tenga carácter reservado. La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en este artículo por el término de cinco años”.

presentado el día 31 de enero de 2010 y reiterado el 17 de marzo de 2020, ante el **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- ORDENAR al **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, suministre al señor **HERNÁN RAMÍREZ BARREIRO**, en su calidad de asociado de Asoequitur, copia *“copia de los documentos que anexaron la junta directiva de Asoequitur, en especial el Acta 55 en el proceso de inspección vigilancia y control 01-305 adelantado contra ésta.*

TERCERO.- Una vez en firme, archívense las presentes diligencias previas las anotaciones de rigor.⁶

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Providencia discutida y aprobada en Sala Jurisdiccional de Decisión de la fecha.

Los Magistrados,

JHON ERICK CHAVES BRAVO

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

⁶ ACH
VoBo Secretario